

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (pp. 1-9)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
(pp. 10-17)**

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada
doctora de Dret Administratiu*

Universitat Jaume I

Sumario: 1. Aprovechamientos forestales: Orden 10/0215, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana (DOCV 7598, de 20 de abril de 2015). 2. Órganos sancionadores: Decreto 93/2015, de 12 de junio, del Consell, por el que se establecen los órganos competentes para la imposición de sanciones por incendio forestal conforme a la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana [2015/5643] (DOCV, núm. 7548, de 15/06/2015). 3. Caza: Ley 9/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de modificación puntual de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana. 4. Períodos hábiles: Orden 18/2015, de 19 de junio, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la temporada 2015-2016, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. 5. Transparencia: Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

1. Aprovechamientos forestales: Orden 10/0215, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana (DOCV 7598, de 20 de abril de 2015)

Cuando se habla de aprovechamiento forestal se hace referencia a toda extracción de animales o plantas de las zonas naturales que se realiza con cualquier finalidad, especialmente para su consumo o transformación. De acuerdo con lo establecido en la legislación forestal vigente, estos aprovechamientos requieren autorización administrativa previa (ahora de manera más simplificada, dicha autorización se ha visto sustituida por las figuras de la declaración responsable y la comunicación previa), y ello porque se pretende —y así lo destaca el preámbulo de la Orden— conjugar los intereses ambientales y los económicos o empresariales en una comunidad en la que el terreno forestal ocupa una parte importante del territorio, pues alcanza casi el 60% de este. Se plantea, así, un uso racional de los recursos forestales tanto públicos como privados, por lo que son necesarios instrumentos técnicos de gestión. Destaca en la elaboración de este reglamento la participación de la Mesa Forestal como órgano de participación ciudadana. La Orden consta de diversos anexos.

El anexo I se refiere a las condiciones generales para la ejecución de aprovechamientos forestales en montes de titularidad privada. La pieza clave de la norma es el plan de gestión forestal, presentado como documento que organiza en el tiempo y en el espacio el régimen de gestión que se pretende implantar en una superficie forestal concreta, asegurando la sostenibilidad de los sistemas forestales e integrando todos los aspectos de multifuncionalidad que en ella se puedan dar.

Como anunciábamos, el aprovechamiento requiere autorización, declaración responsable o comunicación previa (capítulo II), salvo en los casos en que la propia

Orden lo excluya, que deberán presentarse ante la Administración competente. Una vez concedidas, podrán ser suspendidas si concurren determinadas circunstancias. La regla general es que la duración del aprovechamiento sea de dos años en caso de que se requiera autorización, siendo también posible la prórroga, y de uno en el resto de casos.

Debe destacarse que el cumplimiento efectivo de los aprovechamientos es objeto de control, de inspección, por parte de técnicos competentes (capítulo III), lo que significa que los propietarios deben colaborar en las tareas realizadas por la inspección, siendo las actas el documento en el que se recoge el resultado de las operaciones de vigilancia y control.

A las disposiciones generales y comunes anteriores, se acompaña un régimen sancionador que remite a la legislación forestal y patrimonial vigente (capítulo IV).

En cuanto a las reglas comunes de carácter técnico que deben inspirar el aprovechamiento (capítulo V), podemos extraer como principio el del uso compatible, que supone la posibilidad de realizar usos múltiples en la superficie forestal, siempre y cuando se respeten una serie de obligaciones establecidas por la Orden, entre ellas: la conservación de la fauna y la flora o la observancia, en su caso, de la declaración de “espacio natural protegido”. A ello debe sumarse la necesidad de adoptar las medidas oportunas para la prevención de incendios y el mantenimiento de la sanidad forestal, y el deber de mantener en buen estado y transitables las vías forestales de utilidad o uso público. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de limitar la contaminación atmosférica y acústica durante la ejecución del aprovechamiento. Y, finalmente, tras la finalización del aprovechamiento, se obliga a los titulares de este a dejar la superficie sin residuos forestales.

En el anexo que comentamos se regulan disposiciones concretas para el caso de aprovechamientos de madera (capítulo VI), que comprenden las operaciones de corta, desramado, tronzado, saca, apilamiento y eliminación de restos y que están dirigidas a causar el menor daño posible al arbolado que quede en pie, al resto de la cobertura vegetal, al suelo, a la red hidrográfica y a las infraestructuras. Así, como límite temporal se fija que debe intentarse evitar cortas y tratamientos silvícolas durante dos años consecutivos en la misma zona o en las colindantes. La técnica del señalamiento es la utilizada tanto para destacar los árboles que deben ser talados como aquellos que deben permanecer en pie. También se establecen prohibiciones en cuanto al arrastre de productos por los cauces de agua y a la forma de retirar la madera cortada, exigiéndose

la correspondiente limpieza de la zona de actuación.

Seguidamente, se definen determinados conceptos relativos a los aprovechamientos que pueden realizarse: clareos y claras, cortas por aclareos sucesivos, cortas por entresaca, cortas a hecho, resalveo de monte bajo, poda y aprovechamiento de madera quemada.

El capítulo VII regula las reglas concretas para el aprovechamiento de corcho, comenzando por fijar el período de la temporada de descorche y estableciendo determinadas limitaciones a la práctica de este.

El aprovechamiento de pastos lo recoge el capítulo VIII, insistiéndose en este supuesto en la necesidad de uso compatible con la conservación y mejora de los montes, procurando la ordenación de los aprovechamientos ganaderos.

En cuanto al aprovechamiento apícola, el capítulo IX se remite al Decreto 12/1987, de 2 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula y ordena la actividad apícola en la Comunidad Valenciana; al Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas; y a cuantas disposiciones regulen en la actualidad la actividad apícola en la Comunidad Valenciana. El capítulo X se ocupa del aprovechamiento de frutos, micológico y de plantas aromáticas, medicinales y alimenticias, y el capítulo XI se refiere al aprovechamiento de resinas. En cuanto a los terrenos cinegéticos, además de tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, el capítulo XII destaca la necesidad de que el terreno esté debidamente señalizado —de acuerdo con la Orden 5/2012, por la que se establecen las normas de señalización de espacios cinegéticos de la Comunidad Valenciana— y se establece la prohibición de la caza en terrenos forestales incendiados, así como en sus enclavados menores de 250 hectáreas hasta la finalización de la temporada de caza iniciada en el año natural posterior al suceso, siendo requisito necesario para poder realizar el aprovechamiento la aprobación del correspondiente plan técnico de ordenación cinegética.

Por último, el capítulo XIII contiene una relación de los documentos normalizados sobre los aprovechamientos anteriores.

En los anexos II y III se regula la enajenación de los aprovechamientos forestales y la concesión del uso privativo de dominio público forestal para la explotación de instalaciones en montes propiedad de la Generalitat, por lo que es de aplicación supletoria la legislación patrimonial y la Ley de Contratos del Sector Público. Siguiendo

el modelo de la contratación pública, tales operaciones se rigen por dos documentos, que son descritos en sendos anexos: el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de condiciones económico-administrativas, con finalidades y contenidos distintos, que se relacionan de manera complementaria. Así, el primero, por regla general, se refiere al establecimiento y la definición de los aspectos técnicos que debe reunir el objeto de la prestación, es decir, sirve para definir el objeto del contrato y sus características técnicas, mientras que el segundo contiene los pactos y las condiciones que definen los derechos y las obligaciones de las partes del contrato.

Desde el punto de vista subjetivo, ambos documentos obligarán a todas las personas físicas o jurídicas que concurran a las enajenaciones de aprovechamientos forestales y a las concesiones de uso privativo de dominio público forestal, destinado a la explotación de instalaciones, que se desarrollen en montes de la Comunidad Valenciana gestionados por la Generalitat.

El anexo II se ocupa del pliego de condiciones técnico-facultativas. A tales efectos, tras delimitar el ámbito subjetivo, ya mencionado, el anexo recoge una serie de definiciones y disposiciones sobre la comercialización de productos forestales para destacar la necesidad de contar con un instrumento de gestión forestal aprobado por la Administración en el que se detallen y programen los aprovechamientos que vayan a realizarse, el denominado plan anual de aprovechamientos (art. 6 del anexo II), que es de carácter público. El pliego de condiciones técnico-facultativas se publicará en cualquier caso en el DOCV y deberá ser suscrito por el titular del monte, el adjudicatario y el técnico facultativo designado al efecto por la dirección territorial correspondiente.

Destacan algunas cuestiones en cuanto al procedimiento de contratación fijado. En este sentido, el pago del importe de la adjudicación se realizará a través de un canon, pago que podrá hacerse efectivo mediante la redacción y ejecución, por parte del beneficiario de la adjudicación, de un proyecto de gestión forestal sostenible. A diferencia de lo regulado en el artículo 103 del TRLCSP, en este caso la garantía provisional —que se exige a los licitadores que participan en la licitación— se establece como obligatoria, fijándose su importe en un 2% del valor de tasación. La garantía definitiva —que se consigna obligatoriamente por el adjudicatario— asciende al 10% del importe de adjudicación, remitiéndose la Orden en cuanto a la constitución de estas al TRLCSP. Una vez realizada la adjudicación, se requiere licencia para poder ejecutar la actividad,

salvo que no sea necesaria porque es aplicable el régimen de la comunicación previa o expedición de licencia.

De la misma forma que en el anexo I, se prevé también una necesaria labor de control y de inspección de la actividad adjudicada, de la que se encargarán las direcciones territoriales competentes. El fin de la adjudicación requiere la realización de una operación de reconocimiento de la que se levantará un acta final, siendo preceptivo en esa operación recorrer e inspeccionar la zona del monte donde esté localizada y se haya desarrollado la actividad, así como una faja de terreno circundante a ella de 200 metros de ancho.

Se prevé la posibilidad de modificaciones en el aprovechamiento adjudicado, así como la prórroga, suspensión temporal y cesión a terceros, además de la resolución de este. En cuanto al régimen sancionador, se remite a la normativa forestal.

Siguiendo el esquema del anexo I, en el anexo II se recogen normas sobre condiciones técnicas de carácter general que establecen el principio de compatibilidad de usos, esto es, del aprovechamiento y de la conservación de las masas forestales, conservación de la fauna y la flora, así como de los espacios naturales protegidos y la adopción de medidas necesarias para la prevención de incendios y la sanidad forestal, la contaminación acústica..., como hemos comentado en el capítulo V de esta Orden.

Finalmente, se contienen normas específicas para los diversos aprovechamientos: de madera, de corcho, de pastos, de frutos, micológicos, de plantas aromáticas, medicinales y alimenticias, de resina y cinegéticos.

El anexo III se ocupa del pliego general de condiciones económico-administrativas, fijándose, principalmente, los aspectos jurídicos de la adjudicación.

Se determina que la forma ordinaria de adjudicación será la subasta, lo que supone que el oferente que haga la proposición más ventajosa económicamente, superior o igual al tipo de licitación previsto en la tasación pericial del bien y realizada en sobre cerrado, será el adjudicatario. Aunque también se prevé, en determinados supuestos, la posibilidad del concurso cuando el precio no sea el único criterio determinante para la enajenación, en particular cuando el pliego de condiciones particulares técnico-facultativas ofrezca la posibilidad de abonar en especie parte del precio del bien o cuando el bien objeto de enajenación se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines de interés general. La adjudicación directa se permite exclusivamente en los

supuestos que prevé la legislación patrimonial de aplicación.

Se recogen los aspectos relativos a la capacidad del licitador, a la documentación requerida, a la presentación de ofertas y a la celebración de la licitación. En este caso, debemos destacar que observamos algunas carencias como la ausencia de previsiones sobre la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación, o que se contemple la posibilidad de que los contratos estén sujetos a regulación armonizada, siendo necesario, por lo tanto, una mayor publicidad, no solo en el DO autonómico, sino también en el perfil del contratante y en el DOUE.

Como particularidad se contempla la adjudicación de los aprovechamientos cinegéticos, diferenciándose las siguientes modalidades: 1) adjudicación del aprovechamiento cinegético en montes y terrenos propiedad de la Generalitat; 2) adjudicación de los aprovechamientos cinegéticos de los terrenos declarados zonas de caza controlada (en adelante, ZCC) gestionados directamente por la Generalitat; y 3) adjudicación de los aprovechamientos cinegéticos de los terrenos declarados ZCC gestionados a través de entes locales o sociedades de cazadores sin ánimo de lucro, siendo necesario la redacción de un plan técnico de ordenación cinegética.

2. Órganos sancionadores: Decreto 93/2015, de 12 de junio, del Consell, por el que se establecen los órganos competentes para la imposición de sanciones por incendio forestal conforme a la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana [2015/5643] (DOCV, núm. 7548, de 15/06/2015)

El origen de este decreto es la reforma formulada por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que supuso la adaptación del artículo 71 —relativo a las autoridades competentes para imponer multas y al régimen sancionador— de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana.

La modificación busca adecuar la distribución de materias entre las diversas *conselleries* operada por el Decreto 88/2014, de 13 de junio, del Consell. Así, la materia de prevención de incendios pasó a ser competencia de la Conselleria de Justicia y Gobernación, razón por la que el artículo 71, en lo que respecta al procedimiento sancionador en materia de incendios, dispone tras la reforma que, , serán competentes

para imponer multas y las cuantías máximas de las mismas el/la director/a territorial competente por razón de la materia por infracciones leves con multas de 100 a 1.000 euros, el director general competente por razón de la materia por infracciones graves con multas de 1.001 a 100.000 euros y mientras que el *conseller/a* competente será quien sancione las infracciones muy graves, con multas de 100.001 a 1.000.000 de euros.

3. Caza: Ley 9/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de modificación puntual de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana

La Comunidad Valenciana regula desde el año 2004 la práctica de la caza sobre la base de las competencias que le atribuye el artículo 49.1.17 del Estatuto de Autonomía, en relación con el artículo 148.1.11º de la Constitución, a través de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre. No obstante, en febrero de 2015 el Consell acordó adherirse al convenio promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y varias comunidades autónomas por el que se crea la licencia interautonómica de caza y pesca. Esta nueva licencia permitirá unificar y simplificar su tramitación y a ella se han adherido hasta el momento siete comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Asturias y Galicia. Con la Ley que se apunta se ha procedido, pues, a la adecuación de la Ley 13/2004, de manera que se ha visto afectado el artículo 6.2.b), sobre requisitos generales para el ejercicio de la caza, siendo necesario tener superadas o convalidadas las correspondientes pruebas de aptitud, que se regularán mediante una orden de la *conselleria* competente en materia de caza.

A su vez, se deroga la disposición transitoria primera, que disponía lo siguiente: “Las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza serán exigibles a partir del segundo año de la publicación de esta ley y serán obligatorias para quienes hayan sido cazadores por primera vez con posterioridad al 1 de enero del año de entrada en vigor de la Ley. En el plazo de dos años se convalidarán dichas pruebas a quienes no sean cazadores por primera vez y presenten una licencia de caza obtenida con anterioridad al 1 de enero del año de entrada en vigor de la Ley”.

4. Períodos hábiles: Orden 18/2015, de 19 de junio, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la temporada 2015-2016, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana

La Orden establece el período hábil y las normas de caza para la temporada de 2015-2016 en las zonas comunes y regula diversas cuestiones sobre los cotos de caza y las zonas de caza controlada en la Comunidad Valenciana. Para ello, en la Orden se realiza una enumeración de las especies susceptibles de aprovechamiento en donde se distingue entre caza menor, acuática y no acuática, y caza mayor.

Seguidamente se fijan las modalidades de caza permitidas en las zonas comunes de la Comunidad Valenciana, estableciéndose los períodos, los días hábiles y las condiciones específicos para su práctica.

Por otro lado, la Orden aprovecha para modificar diversas normativas, como la relativa al control de determinadas especies, entre ellas las denominadas especies invasoras y también el conejo.

5. Transparencia: Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana

También en abril se aprobó en la Comunidad Valenciana una norma de ámbito general reguladora de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana. En ella se establecen obligaciones sobre publicidad activa y pasiva, en definitiva de información, que afectan también a la materia ambiental. En efecto, en el apartado 5 del artículo 9 — sobre difusión de la información que debe ser ofrecida por las administraciones de manera actualizada y estructurada— se incluye expresamente la información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente. Dicha difusión se realizará a través del Portal de Transparencia de la GVA y expresamente se hace referencia a la difusión de los instrumentos de ordenación del territorio, los planes urbanísticos y la regulación en materia de medio ambiente, garantizando a la ciudadanía su consulta, tanto presencial como telemática, sin perjuicio de lo dispuesto en su normativa sectorial. Este portal de transparencia (www.gvaoberta.gva.es) presenta algunas limitaciones: si bien ofrece una información general suficiente, la información medioambiental todavía no ha sido

sistematizada de manera fácil y accesible. Para acceder a información sobre esta materia, se recomienda consultar la página web de la *conselleria* competente en medio ambiente.

Sumari: 1. Aprofitaments forestals: Ordre 10/0215, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana. (DOCV 7598 de 20 d'abril de 2015). 2. Òrgans sancionadors: Decret 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal d'acord amb la Llei 3/1993, de 9 de desembre de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. [2015/5643] (DOCV núm. 7548 de 15.06.2015). 3. Caça: Llei 9/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana. 4. Períodes hàbils: Ordre 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2015-2016, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. 5. Transparència: Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

1. Aprofitaments forestals: Ordre 10/0215, de 8 d'abril, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana. (DOCV 7598 de 20 d'abril de 2015)

Quan es parla d'aprofitament forestal es fa referència a tota extracció d'animals o plantes de les zones naturals, que es du a terme amb qualsevol finalitat, i especialment per consumir o transformar. D'acord amb el que estableix la legislació forestal vigent, aquests aprofitaments requereixen una autorització administrativa prèvia (ara de manera més simplificada, aquesta autorització ha estat substituïda per la declaració responsable i la comunicació prèvia), i això perquè es pretenen —i així ho destaca el preàmbul de l'Ordre— conjugar els interessos ambientals i els econòmics o empresarials, en una comunitat en la qual el terreny forestal ocupa una part important del territori, quasi el 60%. Es planteja, així, un ús racional dels recursos forestals tant públics com privats i per això cal instruments tècnics de gestió. En l'elaboració d'aquest reglament destaca la participació de la Taula Forestal com a òrgan de participació ciutadana. L'Ordre consta de diversos annexos.

L'annex I es refereix a les condicions generals per a l'execució d'aprofitaments forestals en forests de titularitat privada. La peça clau de la norma és el Pla de Gestió Forestal, presentat com a document que organitza en el temps i en l'espai el règim de gestió que es pretén seguir en una superfície forestal concreta per assegurar la sostenibilitat dels sistemes forestals i integrar tots els aspectes de multifuncionalitat que hi puguin haver.

Com anunciàvem, l'aprofitament requereix autorització, declaració responsable o comunicació prèvia (capítol II), excepte en els casos en què la mateixa ordre ho exclogui, que cal presentar a l'Administració competent. I una vegada s'hagin concedit, es poden suspendre, si concorren determinades circumstàncies. La regla general és que

la durada de l'aprofitament sigui de dos anys en el cas que es requereixi autorització, amb possibilitat de pròrroga, i d'un any en la resta dels casos.

Cal destacar com l'efectiu compliment dels aprofitaments és objecte de control, d'inspecció, per part de tècnics competents (capítol III), la qual cosa significa que els propietaris han de col·laborar en les tasques que du a terme la inspecció, i les actes són el document que recull el resultat de les operacions de vigilància i control.

A les disposicions generals i comunes anteriors s'hi acompanya un règim sancionador que remet a la legislació forestal i patrimonial vigent (capítol IV).

Pel que fa a les regles comunes de caràcter tècnic que han d'inspirar l'aprofitament (capítol V), podem extreure com a principi el de l'ús compatible, que suposa la possibilitat de dur a terme usos múltiples en la superfície forestal, però que impliquen una sèrie d'obligacions com estableix l'Ordre, entre les quals la conservació de la fauna i la flora o l'observança, si escau, de la declaració d'"espai natural protegit". A això ha de sumar-se la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per a la prevenció d'incendis i el manteniment de la sanitat forestal, i el deure de mantenir en bon estat i transitables les vies forestals d'ús o utilitat pública. Un altre aspecte que cal tenir en compte és la necessitat de limitar la contaminació atmosfèrica i acústica durant l'execució de l'aprofitament. I, finalment, després de la finalització de l'aprofitament, s'obliga els seus titulars a deixar la superfície sense residus forestals.

L'annex que comentem regula disposicions concretes per al cas d'aprofitaments de fusta (capítol VI), que comprenen les operacions de tala, esbrancament, trossejat, extracció, apilat i eliminació de restes i que estan destinades a causar el menor dany possible a l'arbratge que quedi en peus, a la resta de la cobertura vegetal, al sòl, a la xarxa hidrogràfica i a les infraestructures. Així, com a límit temporal s'estableix que s'ha d'intentar evitar tales i tractaments silvícoles durant dos anys consecutius en la mateixa zona o en les adjacents. La tècnica de l'assenyalament és la que s'utilitza tant per destacar els arbres que s'han de talar, com els que han de romandre drets. També s'estableixen prohibicions pel que fa a l'arrossegament de productes pels llits d'aigua i a la manera de retirar la fusta tallada, i s'exigeix la corresponent neteja de la zona d'actuació.

Seguidament, es defineixen determinats conceptes relatius als aprofitaments que poden dur-se a terme: aclarides i clars, tales per aclarida successiva, tales per selecció, tales arreu, afavoriment vegetal de bosc baix, poda i aprofitament de fusta cremada.

El capítol VII regula les regles concretes per a l'aprofitament de suro, començant per fixar el període de la temporada d'escorçament i establir determinades limitacions en la seva pràctica.

L'aprofitament de pastures el recull el capítol VIII, que insisteix en aquest supòsit en la necessitat d'ús compatible amb la conservació i millora dels forests, procurant l'ordenació dels aprofitaments ramaders.

Pel que fa a l'aprofitament apícola, el capítol IX; es remet al Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula i s'ordena l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana, el Reial decret 209/2002 de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles i les disposicions que regulen actualment l'activitat apícola a la Comunitat Valenciana. El capítol X s'ocupa de l'aprofitament de fruits, micològic i de plantes aromàtiques, medicinals i alimentàries, i el capítol XI es refereix a l'aprofitament de resines. Quant als terrenys cinegètics, a més de tenir en compte el que es disposa la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, el capítol XII destaca la necessitat que el terreny senyalitzat i la prohibició de la caça en terrenys forestals incendiats i els seus enclavats inferiors a 250 hectàrees fins a la finalització de la temporada de caça que s'iniciï l'any natural posterior al succés, i és requisit necessari per poder dur a terme l'aprofitament, l'aprovació del corresponent Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica.

Finalment, el capítol XIII conté una relació dels documents normalitzats sobre els aprofitaments anteriors.

Els annexos II i III regulen l'alienació dels aprofitaments forestals i la concessió de l'ús privatiu de domini públic forestal per a l'explotació d'instal·lacions, en forests propietat de la Generalitat i per això és d'aplicació supletòria la legislació patrimonial i la Llei de contractes del sector públic. Seguint el model de la contractació pública, aquestes operacions es regeixen per dos documents i cadascun es dedica a cada annex: el plec de prescripcions tècniques i el plec de condicions econòmiques i administratives, amb finalitats i continguts diferents, que es relacionen de manera complementària. Així el primer, per regla general, es refereix a l'establiment i la definició dels aspectes tècnics

que ha de reunir l'objecte de la prestació, és a dir, serveix per definir l'objecte del contracte i les seves característiques tècniques, mentre que el segon conté els pactes i les condicions que defineixen els drets i les obligacions de les parts del contracte.

Des del punt de vista subjectiu, tots dos documents obliguen totes les persones físiques o jurídiques que concorrin a les alienacions d'aprofitaments forestals i a les concessions de l'ús privatiu de domini públic forestal, destinat a l'explotació d'instal·lacions, que es duguin a terme en forests de la Comunitat Valenciana, gestionats per la Generalitat.

L'annex II s'ocupa del plec de condicions tècniques i facultatives. A tals efectes, després de delimitar l'àmbit subjectiu, ja esmentat, l'annex recull una sèrie de definicions i disposicions sobre la comercialització de productes forestals, per destacar la necessitat de disposar d'un instrument de gestió forestal aprovat per l'Administració, en el qual es detallin i es programin els aprofitaments que s'hi hagin de dur a terme, l'esmentat Pla Anual d'Aprofitaments (art. 6 de l'annex II), que és de caràcter públic. El plec de condicions tècniques i facultatives en qualsevol cas s'ha de publicar al DOCV i ha de ser subscrit pel titular del forest, l'adjudicatari i tècnic facultatiu designat a aquest efecte per la direcció territorial corresponent.

Destaquen algunes qüestions pel que fa al procediment de contractació establert: així, el pagament de l'import de l'adjudicació s'ha de dur a terme amb un cànon, pagament que pot fer-se efectiu mitjançant la redacció i l'execució, per part del beneficiari de l'adjudicació, d'un projecte de gestió forestal sostenible. A diferència del que regula l'article 103 del TRLCSP, en aquest cas la garantia provisional —que s'exigeix als licitadors que participen en la licitació— s'estableix com a obligatòria i es fixa el seu import en el 2% del valor de taxació. La garantia definitiva —que s'aconsegueix obligatòriament l'adjudicatari— ascendeix al 10% de l'import d'adjudicació, i l'Ordre es remet pel que fa a la seva constitució al TRLCSP. Una vegada feta l'adjudicació, es requereix la llicència per poder executar l'activitat, llevat que no calgui, ja que és aplicable el règim de la comunicació prèvia o expedició de llicència.

De la mateixa forma que en l'annex I, es preveu també una tasca necessària de control i d'inspecció de l'activitat adjudicada que han de dur a terme les direccions territorials competents. La fi de l'adjudicació requereix la realització d'una operació de reconeixement de la qual s'ha d'aixecar una acta final. En aquesta operació és preceptiu recórrer i inspeccionar la zona del forest on estigui localitzat i s'hagi dut a terme l'activitat, i també una faixa de terreny que la circumdi de 200 metres d'amplària.

Es preveu la possibilitat de dur a terme modificacions en l'aprofitament adjudicat, i també la pròrroga, suspensió temporal i cessió a tercers, a més de la seva resolució. Quant al règim sancionador, es remet a la normativa forestal.

Seguint l'esquema de l'annex I, l'annex II recull normes sobre condicions tècniques de caràcter general que disposen el principi de compatibilitat d'usos, això és, de l'aprofitament i de la conservació de les masses forestals, conservació de la fauna i la flora, també dels espais naturals protegits i l'adopció de mesures necessàries per a la prevenció d'incendis i la sanitat forestal, la contaminació acústica...

Finalment conté normes específiques per als diversos aprofitaments: de fusta, de suro, de pastures, fruits, micològic i de plantes aromàtiques, medicinals i alimentàries, de resina i cinegètic.

L'annex III s'ocupa del Plec general de condicions economicoadministratives i estableix, principalment, els aspectes jurídics de l'adjudicació.

Determina que la forma ordinària d'adjudicació és la subhasta, la qual cosa suposa que la part oferent que faci la proposició més avantatjosa econòmicament, superior o igual al tipus de licitació previst en la taxació pericial del bé i feta en sobre tancat, en serà l'adjudicatària. Tot i que també es preveu la possibilitat del concurs, en determinats supòsits, quan el preu no sigui l'únic criteri determinant per a l'alienació, en particular quan el plec de condicions particulars tècniques i facultatives ofereixi la possibilitat d'abonar en espècie part del preu del bé o quan el bé objecte d'alienació es destini al compliment per l'adjudicatari de finalitats d'interès general. Es permet l'adjudicació directa exclusivament en els supòsits que preveu la legislació patrimonial d'aplicació.

Es recullen els aspectes relatius a la capacitat del licitador, a la documentació requerida, i a la presentació d'ofertes i la celebració de la licitació. En aquest cas, hem de destacar que hi observem algunes mancances com ara l'absència de previsions sobre la tramitació electrònica dels procediments de contractació, o que es prevegi la possibilitat que els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, cal més publicitat, no solament en el DO autonòmic, sinó també en el perfil del contractant i en el DOUE.

Com a particularitat es preveu l'adjudicació dels aprofitaments cinegètics, ja que en aquests casos es diferencien les següents modalitats: 1). Adjudicació de l'aprofitament cinegètic en forests i terrenys propietat de la Generalitat; 2). Adjudicació dels

aprofitaments cinegètics dels terrenys declarats zones de caça controlada (d'ara endavant ZCC), gestionats directament per la Generalitat; 3). Adjudicació dels aprofitaments cinegètics dels terrenys declarats ZCC gestionats per ens locals o societats de caçadors sense ànim de lucre, i cal la redacció d'un pla tècnic d'ordenació cinegètica.

2. Òrgans sancionadors: Decret 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal d'acord amb la Llei 3/1993, de 9 de desembre de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. [2015/5643] (DOCV núm. 7548 de 15.06.2015)

L'origen d'aquest decret és la reforma formulada per la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat i que va suposar l'adaptació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, en concret en relació amb el règim sancionador, pel que fa a l'article 71 d'aquesta última, que es referia a les autoritats competents per imposar multes i quanties màximes.

La modificació està destinada a adequar la distribució de matèries entre les diverses conselleries que es va dur a terme amb el Decret 88/2014, de 13 de juny, del Consell. Així, la matèria de prevenció d'incendis va passar a ser competència de la Conselleria de Justícia i Governació, raó per la qual l'article 71, respecte del procediment sancionador pel que fa a incendis, disposa després de la reforma que per imposar multes i quanties màximes en la instrucció és competent el/la director/a general competent per infraccions lleus o greus, amb multes des de 100 a 100.000 euros i que és competència del conseller/a competent les infraccions molt greus, amb multes de 100.001 a 1.000.000 d'euros.

3. Caça: Llei 9/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana regula des de l'any 2004 la pràctica de la caça prenent com a base les competències que li atribueix l'Estatut d'autonomia en l'article 49.1.17 de l'Estatut d'autonomia, en relació amb l'article 148.1.11º de la Constitució, per mitjà de la Llei 13/2004, de 27 de desembre. No obstant això, al febrer de 2015 el Consell va

acordar adherir-se al conveni tramitat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i diverses comunitats autònomes pel qual es crea la llicència interautonòmica de caça i pesca. Aquesta nova llicència permet unificar i simplificar-ne la tramitació i s'hi han adherit fins al moment set comunitats autònomes: Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Aragó, Astúries i Galícia. Amb la llei que s'apunta, s'ha adequat la Llei 13/2004, de manera que s'ha vist afectat l'article 6.2.b) sobre requisits generals per a l'exercici de la caça, i ara caldrà superar o convalidar les corresponents proves d'aptitud, que s'han de regular mitjançant una ordre de la Conselleria competent sobre caça.

Al seu torn, es deroga la disposició transitòria 1a, que disposava que: "Les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça seran exigibles a partir del segon any de la publicació d'aquesta llei i seran obligatòries per a els qui hagin estat caçadors per primera vegada amb posterioritat a l'1 de gener de l'any d'entrada en vigor de la Llei. En el termini de dos anys es convalidaran aquestes proves als qui no siguin caçadors per primera vegada i presentin una llicència de caça obtinguda amb anterioritat a l'1 de gener de l'any d'entrada en vigor de la Llei".

4. Períodes hàbils: Ordre 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2015-2016, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana

L'Ordre estableix el període hàbil i les normes de caça per a la temporada de 2015-2016 en les zones comunes i regula diverses qüestions sobre els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. Per això, en l'ordre s'enumeren les espècies susceptibles d'aprofitament i es distingeix entre caça menor, aquàtica i no aquàtica, i caça major.

Seguidament es fixen les modalitats de caça permeses en les zones comunes de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els períodes, els dies hàbils i les condicions específiques per practicar-la.

D'altra banda, l'Ordre aprofita per modificar diversa normativa com la relativa al control de determinades espècies, entre les quals de les anomenades espècies invasores i també del conill.

5. Transparència: Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

També a l'abril es va aprovar a la Comunitat Valenciana una norma d'àmbit general reguladora de la transparència, el bon govern i la participació ciutadana, en la qual s'estableixen obligacions sobre publicitat activa i passiva, en definitiva d'informació, que afecta també l'àmbit ambiental. En efecte, en l'article 9 sobre difusió de la informació, és a dir, la informació que ha de ser oferida per les administracions de manera actualitzada i estructurada, inclou expressament l'apartat 5 la informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient. Aquesta difusió s'ha de dur a terme per mitjà del Portal de Transparència de la GVA i expressament es fa referència a la difusió dels instruments d'ordenació del territori, els plans urbanístics i la regulació pel que fa a medi ambient, i ha de garantir-ne a la ciutadania la consulta, tant presencial com a telemàtica, sense perjudici del que disposa en la seva normativa sectorial. Aquest portal de transparència se situa al web www.gvaoberta.gva.es, un accés encara bastant limitat, mentre hi hagi informació general suficient, però que encara no està sistematitzat de manera fàcil i accessible sobre medi ambient, si bé és cert que a través de la pàgina web de la Conselleria competent en medi ambient, es pot accedir a informació sobre aquesta matèria.